El Derecho Internacional Privado en el inicio del Siglo XXI

Diego P. Fernández Arroyo

“Em homenagem ao Prof. Clóvis do Couto e Silva, grande mestre do direito comparado.”

En este inicio de siglo y de milenio que nos ha tocado, nos encontramos frente a una serie de fenómenos que se desarrollan, con distintas características y alcances, en los más diversos ámbitos (políticos, sociales, económicos, etc.) y que repercuten de un modo muy particular sobre el Derecho. Dichos fenómenos, sin ser nuevos, adquieren en la actualidad una fisonomía y unos efectos muy diferentes a los que presentaban en épocas no tan pasadas. El reflejo de los mismos en el mundo jurídico y, en concreto, en el Derecho internacional privado (en adelante, DIPr) nos viene llamando la atención desde hace bastante tiempo y lo que ahora presentamos no es sino una visión actualizada (aunque sucinta) de nuestras líneas de reflexiones al respecto. La idea fuerza es que estos planteamientos muy básicos sirvan para tomar conciencia acerca de la (in)adecuación de los sistemas de DIPr brasileño y argentino a los elementos reales que informan el tráfico externo de nuestros días.

I. Globalización

1. Antes de señalar cómo condiciona al DIPr, resulta fundamental saber a ciencia cierta cuáles son los elementos que componen esa situación tantas veces caracterizada, desde las más variadas perspectivas y con las finalidades más diversas, como globalización. El primer paso que hay que dar para introducirse por ese camino consiste, entonces, en reconocer el carácter real del fenómeno y diferenciarlo de la vestimenta ideológica con la cual se lo ha adornado posteriormente y que muchas veces se confunde con aquél. ¿Cuál es ese fenómeno real al que nos referimos? El que se produce principal aunque no exclusivamente por el auge de la dimensión transnacional del comercio, de los esquemas de organización productiva, de los mercados financieros y de los flujos de inversión, a lo

que se corresponde el declive de la dimensión nacional de los mismos y la pérdida de influencia de los ámbitos de decisión y de regulación estatales. Nadie sensatamente puede negar la existencia de este fenómeno o conjunto de fenómenos que ha ocupado el centro del debate de las ciencias sociales en la última década. Lo que si es materia para la discusión es el alcance y las características de la globalización y, sobre todo, el carácter pretendidamente irreversible de algunas de sus consecuencias. Y esto es discutible porque no forma parte de los datos innegables que brinda la realidad, sino del andamiaje intelectual pergeñado después del surgimiento de la fase actual de la globalización –sobre fines de la década del 80- con el objetivo de justificar y aún de potenciar algunas de sus tendencias, más conocido como “pensamiento único” o “neoliberalismo”.

Es importante dejar aclarado que se habla de “fase actual de la globalización” con la deliberada intención de subrayar que, pese a lo que a veces se pretende hacer creer, el interés de consolidar la dimensión transnacional de la economía no es nada nuevo. Por el contrario, como bien ha dicho Osvaldo Martínez, “todos los capítulos de la modernidad son capítulos de la globalización”. Hay quien incluso retrotrae el inicio de la tendencia hasta mucho más allá del inicio de la era moderna y de la expansión del sistema capitalista. Por mi parte, creo que es difícil no admitir que cuando las potencias europeas comenzaron a secuestrar seres humanos en el continente africano para traerlos a la explotación brutal de los campos de algodón norteamericanos o de la caña de azúcar caribeña y sudamericana, estaban actuando, acaso sin saberlo, dentro de esa dimensión. Y lo mismo hacían Karl Marx y Friedrich Engels cuando, desde una perspectiva filosófico-política muy concreta, llamaban a los proletarios del mundo a unirse hace ya más de 150 años. El primero de ellos ya había hablado repetidas veces de la vocación internacional del capital. Algo que hoy resulta una verdad de Perogrullo.

Lo que es verdad es que la globalización versión cambio de milenio es un fenómeno cualitativa y cuantitativamente diferente a cualquiera que haya existido antes. Y esto es así, fundamentalmente, por el impacto que tiene sobre la internacionalización el desarrollo impresionante de las tecnologías aplicadas a la producción en serie, a los transportes, a las comunicaciones y a la informática. En efecto, al influjo de los avances tecnológicos, las cifras que ofrecen en la actualidad los intercambios comerciales, las inversiones o los movimientos especulativos de capital, son a menudo inmanejables, casi imposibles de aprehender. Hasta hace no muchos años se hablaba de algunas pocas empresas multinacionales muy concretas; hoy su número ha superado las 50.000. Los efectos que estas dimensiones despliegan sobre las estructuras de los Estados son también muy diferentes a los que se producían hasta hace pocos años. No sólo ha cambiado la realidad en sí de la sociedad internacional. También el contexto en el que esa realidad se desenvuelve ha sufrido profundas transformaciones.

En este contexto, Caterina García Segura ha logrado resumir muy bien en unos pocos puntos las características esenciales de la globalización actual. De ellas, las que mejor definen a este fenómeno son:

- la tendencia a extenderse planetariamente;

-su alcance todavía parcial, ya que hay regiones, países y buena parte de la población del mundo que están todavía excluidos de la globalización, mientras que entre los países incluidos sus efectos no han sido totalmente homogéneos;

-su estabilidad en el tiempo, en el sentido de que el proceso no ha sufrido retrocesos significativos, si se excluye el estrepitoso fracaso del Acuerdo Multilateral de Inversiones que prácticamente quitaba toda participación de los Estados en la regulación y orientación de las inversiones internacionales;

-su carácter predominantemente económico, aunque sus consecuencias se manifiestan cada vez más en ámbitos tales como la cultura o el derecho;

-la preeminencia de los actores transnacionales y la consiguiente limitación del papel de los actores estatales, los cuales, sin embargo, siguen manteniendo un margen importante —y, agregaría, indispensable— de acción;

-y, por último, su incapacidad para homogenizar totalmente la diversidad cultural, político-institucional y de valores existentes en el mundo contemporáneo.

Pero existen todavía más elementos ciertamente característicos de esta globalización real que nos toca vivir. Piénsese, por ejemplo, en la uniformidad de las reglas que gobiernan los intercambios comerciales internacionales, especialmente a partir de la aceptación casi universal de la OMC y de su autoridad para dirimir las controversias que se suscitan entre los Estados en el marco de dichos intercambios. O en la presencia ubicua de las directrices trazadas desde el FMI y el BM en la definición de las políticas económicas de la gran mayoría de los Estados, como es el caso de los latinoamericanos. Es preciso tener en cuenta también que si se admite que dentro de la fundamental perspectiva económica de la globalización pueden distinguirse tres dimensiones básicas, a saber: la productiva, la comercial y la financiera, parece bastante claro que la tercera es la que ocupa el centro de la escena, toda vez que es ella la que con mayor fuerza caracteriza al fenómeno en estudio. Este dato es especialmente relevante a poco que se observe la desvinculación cada vez mayor entre la economía real y los mercados financieros.

Frente a todo lo anterior, es justo reparar también en actitudes claramente positivas que trae aparejada la existencia de un modo de pensar global y que pueden enmarcarse dentro de lo que ha dado en llamarse *glocalización*, esto es, pensar globalmente y actuar localmente. Nos referimos a los avances que se han producido en ámbitos tales como la ecología o los derechos humanos, en los cuales la conciencia de la dimensión universal de determinadas cuestiones ha comenzado a erosionar viejos principios que sobrevivían más por la fuerza de determinados intereses que por su solvencia ética y racional. Sin ir más lejos “la preferencia ascendente por la democracia” a la que se refiere Robert Cox es, con todos los matices necesarios, un dato indudablemente positivo de este cambio de milenio (García Segura).

2. Todos los fenómenos que acabamos de mencionar inciden directa o indirectamente sobre el DIPr, tanto sobre el objeto como sobre el contenido. Es indudable que, en general, han contribuido a multiplicar y diversificar las relaciones jurídicas de

DIPr. Así, por ejemplo, la masiva presencia de empresas extranjeras en los países del MERCOSUR, en una medida muy considerable impulsada por la privatización del sector público de cada uno de ellos –que es uno de los fenómenos que ha traído aparejado, más que la globalización, el pensamiento único-, ha generado un sinnúmero de situaciones privadas internacionales. En un contexto más amplio, los compromisos asumidos por los Estados en el marco de organismos tales como la OMC, al mismo tiempo que entronizan el libre comercio y, por lo tanto, aumentan exponencialmente las posibilidades de realizar todo tipo de operaciones comerciales internacionales, imponen para ellos una serie de restricciones que a la larga repercuten sobre los particulares.

Los avances tecnológicos en materia informática están impactando también de un modo extraordinario sobre las soluciones de DIPr para algunas materias -como los contratos y la responsabilidad extracontractual- incluso sobre las más comúnmente aceptadas de aquéllas (Kessedjian, Calvo Caravaca / Carrascosa). Así, por ejemplo, una solución ampliamente recibida en el derecho comparado en materia contractual, es la de proteger al consumidor mediante la limitación o prohibición de la autonomía de la voluntad en los contratos de consumidores, por un lado, y mediante la determinación de la jurisdicción de los jueces y de la aplicación del derecho del país del domicilio o de la residencia habitual del consumidor, por otro lado. Así se prevé en el sistema de DIPr vigente en la Unión Europea (UE), en los sistemas estatales de países europeos comunitarios y no comunitarios y, para hablar de algo más cercano, en el Protocolo de Santa María sobre jurisdicción internacional en materia de relaciones de consumo de 1996.

Sin embargo, la multiplicación exponencial de contratos internacionales “en la red”, lleva a preguntarse legítimamente si esa solución que aparece como tan justa y lógica en contratos de consumo en general, puede resultar también aplicable a la contratación a través de Internet. Téngase en cuenta que, de admitirse la solución general, la oferta de productos y servicios por medio de la red quedaría limitada sólo a las grandes empresas, que serían las que están en condiciones de organizar una adecuada previsión de eventuales pleitos contra ellas en cualquier país del mundo (cualquier país donde haya una computadora conectada a la red y una persona con deseos de consumir), bajo las reglas de ese país. Erik Jayme es uno de los que más claramente ha planteado esta nueva situación que, según él, es uno de los síntomas que marcan la transición del DIPr desde la postmodernidad al futurismo. Ahora bien, existen al menos dos posibilidades para evitar este tipo de situaciones: una consiste en evitar, mediante un artificio técnico, que el sitio en la red del proveedor de bienes o servicios esté operativo en aquellos países en los cuales él no quiere verse potencialmente demandado (Palao Moreno); otra, más ambiciosa, es alcanzar algún tipo de reglamentación material especial que sea generalmente aceptada (Juenger).

3. Desde otra perspectiva, es muy importante subrayar que, tal como se ha venido señalando desde la escuela del pensamiento crítico, el Estado sigue siendo un participante activo de la economía política global. Susan Strange ha puesto de relieve que si bien es

cierto que el Estado ha perdido el control sobre determinadas dinámicas globales que son controladas por otros actores (como es el caso de las grandes empresas multinacionales) y que la necesidad de defender su seguridad económica le lleva a luchar por situarse favorablemente en el mercado global, la situación actual es fruto de una serie de decisiones estatales (García Segura). No es para nada antojadizo afirmar que los que deciden en primera y última instancia en el seno de organismos tales como la OMC, el FMI o la OCDE, son los países del G-7 (o G-8 si sumamos a Rusia). Parece claro que, aun cuando todos los Estados, grandes y pequeños, estén sufriendo profundas transformaciones y sus funciones y capacidades se vean reformuladas, sigue siendo indudable que todos tienen un ámbito propio de decisión, individual o colectivo cuando actúan asociados o integrados.

En este punto debe recordarse que los países latinoamericanos siguieron unas recetas preconizadas pero nunca cumplidas por los países poderosos del planeta. No es difícil ver que los mismos que dan lecciones de apertura seguidas a pies juntillas en América Latina, son los que ponen toda clase de trabas al ingreso de nuestros productos, tanto primarios como manufacturados. Y algo similar ha sucedido respecto de la aparentemente indispensable reducción del papel del Estado en todo lo referido a infraestructuras, investigación científica, educación, salud o programas sociales. Por eso nos animamos a decir que, pese a que la situación internacional traza evidentemente límites al poder decisorio real de los Estados, especialmente de los que no han alcanzado un nivel de desarrollo significativo, pese a que el FMI, la OMC, las multinacionales, etc., etc., constituyen una realidad innegable, son los Gobiernos nacionales los que en última instancia eligen e implementan las medidas concretas que regulan la vida en cada Estado. A ellos les incumbe impulsar no sólo las políticas sino también la elaboración de las normas estatales (entre ellas las de DIPr), la incorporación o no a determinadas convenciones internacionales (con normas de DIPr) y la participación o no en procesos de integración (que elaboran normas de DIPr). Ninguna de esas actividades es ni puede ser neutral. Y de cómo se orienten dependen en gran medida los efectos concretos que los fenómenos que trae aparejados la globalización están teniendo y van a tener en el futuro sobre los Estados.

II. Integración económica y política

4. Nadie, ni el más escéptico anti-integracionista, se anima a negar ya el enorme impacto que han tenido los procesos de integración económica y política sobre el DIPr. Mirado el DIPr desde la perspectiva de la configuración actual de los sistemas estatales que lo reglamentan, se advierten rápidamente diversos ingredientes de complejidad que es preciso destacar y, sin lugar a dudas, el que tiene más trascendencia por los cambios de fondo que trae aparejados es el que tiene que ver con la integración. El conjunto de normas estatales y convencionales vigentes en cada Estado no cubre la totalidad de las situaciones internacionales posibles, ya que asistimos a un proceso progresivo de diferenciación dentro del mismo, caracterizado por la segregación de una categoría de

situaciones vinculadas con un espacio integrado (Desantes Real). Vale la pena insistir: entre todas las transformaciones que han obligado a una adecuación de los discursos explicativos acerca del DIPr, el fenómeno de la integración ocupa un lugar preponderante. Si el discurso «nacionalista» del DIPr tenía su punto de partida en la noción de soberanía legislativa, es lógico que deba ser actualizado a la luz, precisamente, de la competencia reconocida a los órganos de algunos sistemas de integración para elaborar normas de DIPr, ya sea mediante cesión de soberanía (caso europeo, supranacional) o sin ella (caso mercosureño, intergubernamental).

Lo cierto es que la existencia de un fenómeno de integración económica y política supranacional o intergubernamental, de partida, incide sobre los presupuestos del DIPr. Por un lado, la pluralidad de ordenamientos se mitiga por la presencia, siempre limitada, de normas comunes elaboradas por los órganos de integración; en el sistema comunitario europeo, además, este dato se refuerza por la vigencia de un auténtico ordenamiento común caracterizado por los principios de autonomía, eficacia directa y primacía, y por un sistema jurisdiccional que garantiza la interpretación uniforme y la solución de las controversias. Por otro lado, el «imperio» de las libertades *fundamentales* de circulación que se dan -bien que con ciertos límites y excepciones- en un espacio integrado, provoca que los supuestos heterogéneos (las relaciones jurídicas cuyos elementos se localizan en distintos Estados integrados) se multipliquen exponencialmente. O sea que mientras el primer presupuesto denota una suave tendencia a la baja, el segundo cotiza en los niveles más altos posibles.

5. Pero la integración no sólo repercute sobre los presupuestos; también puede generar la configuración de un espacio «comunitario», diferente del espacio interno y del puramente internacional, regido por sus propias normas y por unos principios característicos que en su conjunto pueden constituir un ordenamiento diferente. En la CE es una realidad y se le llama derecho comunitario; en el MERCOSUR lo que existe es un derecho de la integración que va, paulatinamente, cobrando perfiles propios, como se puede atisbar en los laudos arbitrales producidos hasta ahora (Noodt Taquela, Uriondo de Martinoli). La presencia y el desarrollo de ese nuevo ordenamiento -tanto mayor cuanto más se profundiza en carácter y más se amplía en contenido la integración- provoca dos consecuencias importantísimas para el DIPr: por una parte, los órganos de la integración tienen la posibilidad, dentro de los límites que cada proceso de integración fije, de elaborar normas para regular las relaciones de tráfico privado externo que pueden afectar tanto a los intercambios intracomunitarios como a los que vinculan a un Estado miembro con uno que no lo es (en la CE este rasgo es muy claro, ya que el DIPr comunitario afecta tanto alas relaciones intracomunitarias como a otras que no lo son -Jayme / Kohler-); por otra parte, las normas y, sobre todo, los principios de ese ordenamiento común trazan una serie de límites a la elaboración de normas de DIPr por los legisladores de los Estados miembros y al funcionamiento de los sistemas estatales de DIPr.

6. Lo que mencionamos aquí ha adquirido unas proporciones sorprendentes en la UE, sobre todo a partir de la entrada en vigor de la reforma del Tratado constitutivo de la CE producida en Ámsterdam en 1997 (en vigor desde el 1º de mayo de 1999). En efecto, en Europa se dieron –y de una manera paradigmática– todos los efectos de la integración que acabamos de mencionar: modificación de los presupuestos del DIPr, diferenciación de las situaciones privadas internacionales, límites y directrices comunitarios para los sistemas nacionales de DIPr, y elaboración progresiva de un DIPr común. Ese DIPr común, que estaba constituido por convenciones intergubernamentales (y que, por lo tanto, no configuraba un DIPr comunitario *stricto sensu* sino un DIPr de ámbito comunitario, también llamado “DIPr cuasicomunitario”), empezó primero a conocer una tímida comunitarización sectorial a través de la inclusión de normas de DIPr en textos comunitarios de derecho material (sobre temas tan disímiles como seguros, marcas, contratos de utilización de inmuebles por tiempo compartido y otros referidos a consumidores), y está ahora mismo experimentando una nueva etapa absolutamente novedosa desde la comunitarización total del DIPr dispuesta por el Tratado de Ámsterdam.

En efecto, este último introdujo una modificación verdaderamente revolucionaria en el art. 65 del Tratado de la CE. A partir de ese momento todo el DIPr (la norma mencionada se refiere a todos los sectores comprendidos en su contenido, es decir, jurisdicción internacional, derecho aplicable y reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales y demás cuestiones incluidas en la cooperación judicial y extrajudicial internacional; el artículo también se refiere a “las normas de procedimiento civil aplicables en los Estados miembros”) podrá ser regulado por normas de derecho comunitario derivado, es decir, el que elaboran los órganos comunitarios. De hecho, el 29 de mayo de 2000 se aprobaron tres reglamentos comunitarios (de aplicación directa en todos los países comunitarios a excepción de Dinamarca que cuenta con un estatus especial al respecto) sobre DIPr, relativos a jurisdicción internacional y reconocimiento de decisiones extranjeras en materia de familia, a notificaciones y a procedimientos de insolvencia –respectivamente–, el 22 de diciembre del mismo año se aprobó un reglamento sobre jurisdicción internacional y reconocimiento de decisiones extranjeras en materia de derecho privado patrimonial, destinada a sustituir a la Convención de Bruselas de 1968, y el 28 de mayo de 2001 se aprobó un reglamento relativo a la obtención de pruebas. De este modo ha comenzado a llevarse a cabo la anunciada “comunitarización” del DIPr europeo, que abre una serie de interrogantes acerca de la repercusión de dicho proceso en la actividad interna y externa de los países comunitarios.

7. A pesar de este (y otros muchos) desarrollos europeos, es bien sabido que la integración siempre fue también un *desideratum* americano. Todos los prohombres de la independencia bregaron por ella. Bolívar, San Martín, Artigas, O’Higgins, Martí y tantos otros, plantearon incansablemente, en los dichos y en los hechos, esta necesidad, la misma que se ha mantenido siempre, con momentos peores y mejores en el espíritu de los pueblos americanos. Pero lo que siempre fue un objetivo político de fondo, se ha convertido además,

con la modificación del escenario mundial, en una imposición de la realidad. No es fruto de la casualidad ni de la moda que la última década del siglo XX haya estado marcada, en el continente americano, por el resurgir del ideal de la integración, aunque desarrollado por ahora a escala subregional. Hasta el país más poderoso de la tierra ha visto la necesidad de introducirse por este camino, mediante la creación de una zona de libre comercio profundizada con sus vecinos norteamericanos y el impulso de un proyecto continental de libre comercio cuyo lanzamiento está previsto para el año 2005. El Caribe, Centroamérica, el Norte y el Sur de Sudamérica, han visto resurgir con nuevo impulso y en un contexto bien diferente los procesos de integración económica entre los Estados.

La situación es bastante clara. Los Estados llamados centrales protegieron siempre el desarrollo y la fortaleza de los mercados nacionales. En algunos casos, actuando individualmente, en otros casos, como es el ejemplo europeo occidental, en conjunto, mediante el accionar de un organismo supranacional de integración. Para los Estados llamados periféricos la consolidación del mercado interno es prácticamente imposible en la actualidad. Pero tal imposibilidad tiene que tender a decrecer si estos Estados no actúan aisladamente sino en conjunto, constituyendo bloques de integración. Cuanto más fuerte y materialmente extendida sea dicha integración, mayores posibilidades de mantener un tejido productivo sólido y un mercado “interno” (interno del bloque) dinámico y competitivo. Cuando decimos que los Estados están sufriendo profundas transformaciones, se hace referencia, entre otras cosas, a los cambios que se derivan de la participación de los mismos en procesos de integración. En este sentido, resulta primordial tener en cuenta que los Estados no reciben el impacto de la globalización en la misma medida ni con las mismas consecuencias y que las tendencias de la globalización no son ni universales ni homogéneas, del mismo modo que no son idénticos los Estados. Por lo tanto, no es del todo apropiado hablar de las estrategias de los Estados frente a la globalización en forma abstracta, planteando un discurso de validez universal, sino que se hace imprescindible descender hasta los últimos aspectos particulares, especialmente económicos y sociales, para definir qué es lo que le conviene en este momento a cada país en concreto o grupo de países con intereses comunes.

Cualquiera sea el modelo de integración que se elija y el grado de profundidad al que se quiera llegar, es evidente que la integración genera una igualación fronteras adentro y una diferenciación —podríamos decir incluso una discriminación— fronteras afuera. Precisamente por eso se hace tan importante no quedarse sólo en un escenario internacional como el actual. Los países del MERCOSUR, aisladamente considerados lo tienen muy difícil para negociar por sí solos, por ejemplo, una mejora en las condiciones perjudiciales para la entrada de sus exportaciones en la CE. Tiene poco que ofrecer a cambio de una apertura del mercado europeo para sus productos. Pero actuando todos juntos, más los dos asociados, la situación no debería ser la misma. Por esa misma razón, la capacidad negociadora de los bloques subregionales de integración en el marco de la construcción del ALCA, estará en relación directa con la consolidación de sus mercados interiores: cuanto más fuertes, estables e integrados sean éstos, mayor capacidad

negociadora y mejor situación comparativa en el resultado final del proceso. Para que estas no sean palabras huecas en el marco del MERCOSUR, se hace preciso modificar muchas actitudes, no sólo de parte de los gobiernos sino también de los operadores económicos. Al menos se hace necesario acompañar las declamaciones de intenciones en este sentido con políticas claras y coherentes con dicho discurso.

Es por eso que se hace urgente e imprescindible generar un discurso tan coherente como solvente acerca de la integración. Un discurso que explote al máximo, con mucha imaginación las posibilidades reales de nuestra integración. No se trata, como hemos hecho en tantos campos de copiar otros modelos, sino de encontrar el más apropiado para nuestra realidad y nuestras necesidades. Es obvio que si los europeos se encuentran hoy en una buena posición para enfrentarse al envite de la globalización, se debe en gran medida al hecho de que la historia los empujó después de la catástrofe de la segunda guerra mundial, a unir sus destinos con carácter permanente. Eso es fundamentalmente lo que nos debe interesar de ese modelo. La integración mercosureña difícilmente podrá cumplir el papel que aquí se propugna si no se la dota de un aparato institucional sólido y de unas reglas de juego claras y exigibles. Y, sobre todo, si los Estados partes no toman en serio al MERCOSUR y el cumplimiento de sus reglas y sus políticas.

III. Auge de la cooperación internacional

8. De los muchos ámbitos en los cuales la cooperación internacional ha cobrado un auge inusitado en los últimos años, el jurídico es tal vez el que muestra un crecimiento más significativo, tanto cualitativa como cuantitativamente. Esta afirmación halla sustento en el entendimiento amplio de la noción de cooperación jurídica, que permite encuadrar dentro del mismo no sólo a la que tiene lugar mediante los convenios internacionales o las normas emanadas de los organismos de integración que reglamentan específicamente la cooperación en el campo del derecho (cooperación jurídica *stricto sensu*), sino también a aquella que, referida esencial o prioritariamente a otras cuestiones (cooperación económica –y, dentro de ésta, la cooperación al desarrollo-, política, cultural, etc.), se canaliza por el cauce de distintos tipos de convenciones internacionales (cooperación jurídica *latu sensu* o “aspectos jurídicos de la cooperación internacional” –van Loon-). Lógicamente, también puede ubicarse dentro del concepto restringido de cooperación jurídica a la que se produce unilateralmente por los Estados en aplicación de las normas que al respecto existen en cada ordenamiento.

Dentro de la cooperación jurídica *stricto sensu* se deben realizar también dos distinciones de carácter conceptual. La primera sitúa de un lado a la cooperación que se produce en el ámbito del derecho público implicando, con técnicas y características muy diversas al DIP, al derecho penal internacional, al derecho fiscal internacional, etc., y del otro lado a la que tiene lugar ligada esencialmente a cuestiones de derecho privado. Lógicamente, la realización de esta demarcación no significa desconocer que puede

haber zonas de intersección entre sendos ámbitos, sobre todo en relación con casos concretos. Hecha esta salvedad, es en la esfera del derecho privado -que es, por razones de especialidad, la que más interesa para este trabajo- donde cabe hacer la segunda distinción anunciada.

Para explicarla puede echarse mano a la clásica composición del derecho procesal civil internacional, el cual, como dijimos, estaría formado por: la jurisdicción internacional, el reconocimiento y ejecución de actos y decisiones extranjeras y -un poco más amorfo- el sector constituido por los problemas procesales que se plantean en torno a la situación privada internacional. La cooperación jurídica afectaría en principio a este último sector (sobre todo a la asistencia judicial internacional) y, en general, a toda reglamentación que organice las formas de llevar a cabo la colaboración que las autoridades judiciales y administrativas de los Estados deben prestarse entre sí para una mejor solución de los casos internacionales (aquellos vinculados con dos o más ordenamientos jurídicos).

Los fundamentos actuales de la cooperación jurídica internacional no pueden cifrarse en la tradicional consideración de la obligación, más o menos natural, que tendrían los Estados de prestarse asistencia mutua (obligación habitualmente ligada a la exigencia de reciprocidad). Hoy en día la internacionalización de la vida de las personas hace que los Estados deban ponerse de acuerdo para alcanzar mecanismos que permitan la protección de los intereses de aquéllas frente a las situaciones privadas internacionales. El derecho de los particulares a ser tutelados judicialmente de manera efectiva va transformando en obligatorias las actitudes estatales otrora realizadas con una cierta espontaneidad. Paralelamente, específica pero no exclusivamente en el ámbito patrimonial, la cooperación va dejando de ser una opción para convertirse en una exigencia inherente a las necesidades del gran mercado (van Loon). La consolidación de la excepcionalidad del orden público, junto con otras tendencias claramente detectables en especial en dicho ámbito patrimonial no hacen sino confirmar el auge alcanzado por la cooperación en esta materia.

9. Con el entendimiento anterior, serían convenciones de cooperación jurídica internacional (o cooperación internacional en el ámbito jurídico o, con mayor precisión, en el ámbito del DIPr, a poco que admitamos que la dispersión elemental de una relación jurídica de derecho privado caracteriza a la situación objeto del DIPr), los que reglamentan la realización de medidas cautelares, la obtención de pruebas, la información acerca del derecho extranjero, los que establecen un procedimiento para la devolución de los menores al país de su residencia habitual o para que tenga lugar una adopción internacional, etc. Para el mejor funcionamiento de dichos convenios se ha creado la figura de la «autoridad central», la cual cumple un papel de suma importancia en tanto canalizadora de la cooperación (Droz, Borrás). Del mismo modo, es posible encontrar normativa autónoma relativa a esas cuestiones; un ejemplo que viene al caso lo constituyen las reglas procesales que algunos Estados han debido incorporar a sus legislaciones nacionales para evitar que alguno de los convenios mencionados no pudieran aplicarse correctamente debido a la carencia de las herramientas procesales adecuadas. Es lo que ha sucedido, por ejemplo,

respecto de la Convención de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción de menores de 1980.

Ahora bien, entre toda la «reglamentación para la cooperación», cabe poner un énfasis especial sobre la función «cooperante» de la que disciplina el reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras y la jurisdicción internacional, ya que representa la forma más sublime y acabada de cooperación en el ámbito jurídico. Digo que es la forma más sublime y acabada porque en este caso no se trata de prestar una ayuda concreta para una actividad que se desarrolla en el extranjero o que está estrechamente vinculada con otro Estado, sino -de alguna manera- de renunciar a la propia potestad decisoria sobre un supuesto permitiendo que la decisión adoptada por una autoridad foránea despliegue sus efectos en el foro. Si se acepta entonces -y no puede ser de otro modo- que la cooperación implica decisivamente no sólo a las cuestiones estrictamente enmarcadas en la «asistencia judicial internacional» sino también y muy especialmente al reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, resta plantearse de qué modo puede afectar al otro sector del derecho procesal civil internacional, es decir, a la jurisdicción internacional. Desde su faceta «indirecta» la respuesta parece obvia ya que en tal caso la jurisdicción internacional se configura como un requisito más del reconocimiento; dicho de otro modo, la elaboración de normas de jurisdicción internacional indirecta, sean éstas expresas o implícitas -como la que se deduce de la vigencia de un foro de competencia exclusiva-, siempre se produce en el marco de una regulación del reconocimiento (González Campos).

Por su parte, la reglamentación directa de la jurisdicción internacional (jurisdicción internacional propiamente dicha) también admite una comprensión «cooperante», en particular, cuando la función distributiva o atributiva de competencia a ella asignada (según se trate, respectivamente, de normas de fuente internacional o interna) aparece íntimamente ligada a la facilitación de la circulación de resoluciones judiciales. Tal situación se da, en particular, en las llamadas «convenciones dobles» que regulan en un mismo texto la jurisdicción y el reconocimiento, y que reconocen su paradigma en la Convención de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, celebrada entre los Estados miembros de la CE, afectada por el proceso de comunitarización antes mencionado. En estas convenciones, la distribución de competencia entre las autoridades de los Estados partes se opera en gran medida con la finalidad de garantizar tanto como sea posible la efectividad en todos dichos Estados de las decisiones que se adopten en cualquiera de ellos.

Dicho modelo se ha mantenido incólume en las diferentes versiones de la Convención de Bruselas (las surgidas de cada ampliación de la CE), en el Reglamento que la comunitariza y en el Reglamento que ha ampliado ese mecanismo doble de jurisdicción y reconocimiento para la separación, el divorcio, la nulidad del matrimonio y la responsabilidad parental sobre los hijos comunes (conocido en la jerga europea como «Bruselas II»), pero también en la «extensión» espacial de dicha Convención a los Estados de la ya diezmada Asociación Europea de Libre Comercio (Convención de Lugano de 16 de septiembre de 1988). En cambio, se da mucho más matizadamente, en el Proyecto de convención que se viene discutiendo en el seno de la Conferencia de La Haya de Derecho

Internacional Privado sobre la misma materia, cuyo modelo ya no es “doble”, sino “mixto”. De una forma o de otra, y más allá del éxito que llegue a tener o no el Proyecto de La Haya, no es difícil constatar que la cooperación en torno a la fluidez de la circulación de resoluciones judiciales se va convirtiendo progresivamente en uno de los pilares esenciales del tráfico internacional de nuestros días. Piénsese, de paso, en el éxito impresionante de la Convención de Nueva York sobre ejecución de sentencias arbitrales de 1958, mediante la cual un número enorme de Estados (126 a mediados de 2001) han asumido la obligación de ejecutar lo que un árbitro o un tribunal arbitral (es decir, unos particulares) decide fuera de su jurisdicción. Y es precisamente el alcance que va teniendo la cooperación en estos ámbitos reconocimiento, jurisdicción, arbitraje) lo que reafirma el auge de la misma como fenómeno condicionante del DIPr actual.

IV. Influencia de los derechos humanos

1. Dimensión internacional de los derechos humanos

10. Si nos centramos en la función que despliega la constitución en cada uno de los sistemas estatales de DIPr, puede verse que el DIPr, como todo el resto de subsistemas que conforman cada ordenamiento, está lógicamente impregnado de los valores y principios consagrados en la norma fundamental. Lo que pasa con la concepción y aplicación de la normativa destinada a regular las situaciones internas, sucede también respecto de las normas de DIPr. No podría ser de otro modo. Ni el legislador puede elaborar normas que contradigan esos mandatos esenciales, ni los jueces y administradores tomar decisiones que impliquen una vulneración de los mismos. Entre ellos, huelga decir que se destacan los que consagran derechos humanos y garantizan su ejercicio.

Así planteado el panorama, es difícil identificar principios y valores que sean exclusivos de algún Estado en particular. Al contrario, aunque es indudable que en el mundo coexisten diferentes concepciones culturales que en no pocos casos repercuten sobre los derechos fundamentales y sobre aspectos esenciales del derecho privado (especialmente en el ámbito familiar), la segunda mitad del siglo XX ha estado signada por un proceso general en pos del reconocimiento a escala internacional de esos derechos. Entre países con tradiciones comunes es evidente que se comparten una gran cantidad de valores y que los mismos han quedado plasmados en normativa internacional sobre derechos humanos. Obviamente, esta evidencia no implica uniformidad absoluta ni carencia de conflictos. Por ejemplo, ni siquiera en los países que forman parte del Consejo de Europa, «afectados» por la vigencia del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (Roma, 1950) y por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puede decirse que todos los ordenamientos estatales hayan recogido por igual, o apliquen efectivamente, los principios establecidos por aquél y desarrollados por éste. Es más, en un ámbito bastante más restringido que el

anterior, el de la UE, ha costado muchísimo tiempo ponerse de acuerdo sobre el contenido de una Carta de derechos fundamentales y una vez que se ha logrado, se ha preferido no darle, al menos de momento, un carácter estrictamente jurídico, esto es, vinculante. Hechas estas salvedades, no hay que ser muy fino observador para constatar que los instrumentos patrocinados por diversas organizaciones internacionales y que han sido elaborados para proteger de alguna u otra manera los derechos humanos se han multiplicado en las últimas décadas y han recibido una nada desdeñable aceptación.

En particular, muchos Estados han reconocido la importancia de la normativa sobre derechos humanos otorgándole a la misma rango supralegal o incluso, como es el caso de Argentina o Paraguay, constitucional (Rey Caro, Bidart Campos). Aun en Brasil, donde la jerarquía supralegal de los tratados internacionales en general es una asignatura pendiente, parece en cambio clara dicha jerarquía cuando se trata de tratados protectores de los derechos humanos, sobre la base de lo estipulado en los párrafos 1º y 2º del art. 5 de la Constitución de 1988 (de Oliveira Mazzuoli). El aprendizaje de la aplicación práctica de estas ideas, no obstante, requiere tiempo, ya que muchas veces en las jurisdicciones nacionales se percibe, ante casos concretos —especialmente cuando tienen alguna trascendencia política—, una cierta resistencia a tratar las normas internacionales como lo que son, es decir, como parte integrante del ordenamiento estatal (Garro).

2. Derechos humanos y DIPr

11. Sin ser una cuestión enteramente novedosa, el creciente impacto de los derechos humanos sobre el DIPr es digno de destacar. En el sector de la jurisdicción internacional, para empezar, la garantía de acceso a la justicia lleva a desterrar la utilización de foros de competencia exorbitantes, que son aquellos según los cuales la actividad del juez se basa en un criterio desprovisto de razonabilidad, normalmente favorable a la parte vinculada con el foro y consecuentemente desfavorable —y a veces imprevisible— para la otra parte. Precisamente, la protección de esta garantía conduce en determinadas circunstancias a consagrar lo que se denomina un “foro de necesidad”, que es aquel que, pese a no estar taxativamente previsto en las normas vigentes, permite la actuación de un juez con el fin de evitar un supuesto de “denegación de justicia”. También para el trámite procesal las normas de derechos humanos establecen criterios específicos que deben respetarse cualquiera sea la jurisdicción y la correspondiente ley aplicable al proceso, como hemos podido observar en los últimos años en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aplicación del Pacto de San José de Costa Rica.

Del mismo modo, la tarea de concretar la referencia general al orden público, tanto para comprobar la viabilidad de la aplicación de un derecho extranjero como la del reconocimiento de una sentencia extranjera, suele requerir el análisis del contenido y el alcance de los derechos humanos implicados. En esa tarea las referencias a la constitución y a las convenciones internacionales van de la mano (Jayme). En algunos casos, los

constituyentes han sido muy explícitos, como es el caso del español, que en el art. 10.2 de su Constitución establece: “(L)as normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

12. Los ejemplos concretos sobre los que podemos hablar son muchísimos. Así, si nos situamos en el impacto sobre el legislador, puede mencionarse el causado por el principio igualdad o de no discriminación sobre las normas de DIPr que utilizaban un punto de conexión «sexista» (aplicación de la ley nacional del marido o del padre), fenómeno que se dio en algunos países como Alemania, Italia y España no hace tanto tiempo, provocando la modificación de dichas normas. Si en cambio nos centramos en la actividad de los jueces, resulta claro, por ejemplo, que a los menores les asiste, en un gran número de Estados, una singular «protección constitucional». No parece razonable, sin embargo, que la identificación del *interés del menor*, en cuanto parámetro de solución jurisprudencial, dependa en cada caso internacional exclusivamente de los dictados materiales del foro; es más, dicha dependencia puede ser muy peligrosa si la aparente información material del propio ordenamiento es sólo una excusa para privilegiar otros intereses distintos. En cualquier caso, en general habrá de tenerse en cuenta que para que prospere el freno del orden público, concretado en la identificación de un principio o valor específico, será indispensable que el caso en cuestión presente una vinculación suficiente con el foro. En tal sentido se ha insistido, a nuestro juicio con razón, en que ni siquiera la constitución puede aplicarse de forma «imperialista» a cualquier situación privada internacional, sin tener en cuenta la «intensidad» de la vinculación de la misma con el ordenamiento jurídico del foro (Jayme).

13. No podemos dar por terminado este tema sin hacer referencia al tema de la sociedad multicultural (fenómeno que se produce al influjo del incremento experimentado por las corrientes migratorias provenientes de distintas partes del mundo, y a la forma y cualidad con las que las comunidades inmigradas se instalan en los países de acogida) que viene ocupando muchísimas de las páginas dedicadas al DIPr, especialmente en Europa, aunque tal «localización» europea es sólo aparente (Europa no es ni con mucho la única sociedad multicultural). La importancia del tema radica, sobre todo, en que estos desarrollos teóricos pero también jurisprudenciales han actuado como catalizadores en la elaboración o perfeccionamiento de instrumentos técnicos del DIPr y en un replanteamiento general acerca del papel de los derechos fundamentales en la reglamentación y aplicación del DIPr, efectos que trascienden a cualquier limitación geográfica.

El caso es que se producen conflictos cuya cuestión subyacente pasa por la tensión entre la idea de asimilación (en el sentido de integración del inmigrante en su sociedad de acogida) y la de respeto a la identidad cultural. La solución de esa tensión debe buscarse siempre por referencia a la actuación de los derechos fundamentales, la cual implicará,

por principio, el reconocimiento (que es más que tolerancia) de los derechos del «otro». En el contexto europeo -aunque esté pensado para las minorías locales más que para las inmigrantes- es dable destacar la trascendencia que puede llegar a tener el Convenio marco para la protección de las minorías nacionales del Consejo de Europa, firmado en Estrasburgo el 1 de febrero de 1995. Allí se establece: la prohibición de toda discriminación fundada en la pertenencia a una minoría nacional (art. 4.1^º), el compromiso de los Estados partes de promover las condiciones necesarias para permitir a las personas pertenecientes a minorías nacionales mantener y desarrollar su cultura, así como preservar los elementos esenciales de su identidad, a saber, lengua, religión, tradiciones y patrimonio cultural (art. 5.1^º), y la prohibición de toda política encaminada a la asimilación no voluntaria (art. 5.2^º). E. Jayme expresa, en la misma línea, que el derecho a la protección de la identidad cultural se ha convertido en una categoría jurídica, refiriéndose al art. 30 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989. No obstante, no debe desconocerse (sobre todo por lo peligrosas que son y por las consecuencias negativas que provocan) que existen posiciones no tolerantes y que propugnan la imposición sin más de los valores «occidentales» (como la mantenida por de Miguel Asensio), ideas de especial predicamento a partir de los sucesos del 11 de septiembre de 2001.

Los conflictos señalados, que no pocas veces se han exteriorizado a través de deplorables episodios de racismo y xenofobia, a menudo dan lugar a típicos problemas de DIPr, generalmente relacionados con instituciones de derecho de familia que resultan extrañas o «chocantes» para los ordenamientos europeos. Buena parte de ellos se plantean respecto a sistemas jurídicos de base religiosa, sobre todo los basados en el islamismo o influenciados netamente por él. Le cabe entonces al DIPr el establecimiento y la aplicación de herramientas técnicas que permitan la convivencia de valores dentro de la sociedad multicultural (Sánchez Lorenzo, Jayme). Entre ellas tendrán un lugar las referidas a la actuación del principio de igualdad (no discriminación por razones raciales o de nacionalidad), a la amplitud reconocida a la autonomía de la voluntad y a las limitaciones mencionadas para la aplicación de los principios de orden público, pero también las que pasan por una revalorización frente a estos problemas de la conexión nacionalidad, por el juego de la teoría de un DIPr en dos escalones y por la concreta elaboración de normas materiales de Derecho de familia para la sociedad multicultural.

V. Expansión de la autonomía de la voluntad (privatización del DIPr)

14. Una de las definiciones esenciales que la doctrina ha asumido desde hace bastante tiempo es la que resalta el carácter «privado» del DIPr. Esto que puede parecer una afirmación tautológica en realidad no lo es tanto. Por un lado, no lo es porque paradójicamente las concepciones tradicionales del DIPr han sido claramente «publicistas», razón por la cual nunca está de más subrayar lo contrario. Por otro lado, debe recordarse que el tratamiento que antes hemos hecho acerca de la situación privada internacional

tenía que ver con la definición del objeto y la consecuente concreción del contenido. En cambio, lo que ahora nos interesa destacar, en tanto factor condicionante del DIPr de nuestros días, es a quién corresponde la reglamentación de las concretas relaciones que se producen en el tráfico privado internacional. Y es ahí donde se hace preciso mencionar cómo se viene desarrollando un marcado proceso de “privatización” del poder regulador, fenómeno que puede analizarse en tres niveles: el referido al margen que tienen los particulares (personas físicas o jurídicas) en una relación jurídica para establecer su marco concreto de derechos y obligaciones recíprocas, el vinculado con la actividad normativa y decisoria de alcance general elaborada fuera de los círculos oficiales, y el que se está dando en algunos ámbitos oficiales encargados de la codificación internacional.

15. Respecto del primer nivel (el de la autonomía de la voluntad en el caso concreto), puede comprobarse cómo las normas nacionales, convencionales e institucionales de las más variadas regiones y países del mundo no sólo han reafirmado en las últimas décadas el poder de los particulares para autorregularse dentro del ámbito más tradicional, el de los contratos, sino cómo, además, ese poder se va extendiendo hacia áreas antes vedadas al despliegue de la autonomía, como son las que tienen que ver con el llamado “estatuto personal” (personas, familias y sucesiones). Cualquiera sea el ámbito material en cuestión, la autonomía de la voluntad no se restringe a la potestad para determinar el juez competente y el derecho aplicable (lo que ya es mucho decir) sino que va experimentando un despliegue material que va mucho más allá, operando sobre la concepción misma de las relaciones jurídicas (Alfred E. von Overbeck habla así de la “irresistible extensión de la autonomía en el DIPr”).

En materia de familia, por ejemplo, cada vez más países reconocen el derecho de contraer matrimonio de variadas formas civiles y religiosas, con exactamente los mismos efectos jurídicos, algunos de los cuales también se reconocen sin necesidad de matrimonio. En no pocos países los contrayentes pueden elegir, con más o menos restricciones, el derecho aplicable a los efectos del matrimonio, incluso a los efectos personales (Carrascosa González). La Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias (CIDIP IV) consagra en la última parte de su art. 8, la creación de un foro de jurisdicción internacional en virtud de la voluntad de las partes (comparecencia del demandado sin objetar la competencia, es decir, sumisión tácita). Y en la UE, desde marzo de 2000, no sólo pueden los cónyuges designar de común acuerdo el juez competente para la separación, el divorcio o la nulidad, sino que a cada uno de ellos, en forma separada, le basta para “crear” una jurisdicción competente fijar su domicilio en el Estado comunitario que mejor le venga y esperar seis meses (si es nacional de ese Estado) o un año (si no lo es). Yendo del ámbito familiar al contractual, no es preciso ir hasta Europa para ver cómo la autonomía de la voluntad se ha transformado en el elemento central de la reglamentación; las normas elaboradas por el MERCOSUR en esta materia (Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual y Acuerdos de Arbitraje) consagran claramente esta opción legislativa como principio de base de la reglamentación

mercosureña. Sin embargo, no todos los ordenamientos nacionales de los países del MERCOSUR parecen haber tomado buena nota de ello.

16. El segundo nivel aludido se da precisamente en el ámbito contractual. En efecto, en los contratos internacionales las partes no sólo pueden moverse en el ámbito institucional, eligiendo entre las jurisdicciones y los ordenamientos jurídicos que les ofrecen los Estados, sino que pueden llevar su poder de regulación más allá, saliéndose de esa oferta “pública” para utilizar normas elaboradas por organismos privados (la llamada *lex mercatoria*) y plantear sus controversias ante otros particulares (árbitro o tribunal arbitral). Lo llamativo del asunto es que los Estados y las organizaciones internacionales de carácter público van reconociendo cada vez más espacio a estas manifestaciones normativas y decisorias provenientes del ámbito privado, admitiendo la validez de unas y los efectos de las otras. Todo lo señalado no implica en ningún caso que la autonomía sea ilimitada. Es verdad que los Estados, individualmente o en conjunto, van dejando cada vez más espacio a la autorregulación de los particulares en los dos niveles mencionados; pero también es verdad que siempre se reservan una parcela intocable en términos de orden público o de normas de policía. Además, como antes decíamos, no todos los países admiten de igual manera lo que indudablemente es una tendencia que se viene dando a escala mundial.

17. Finalmente, el otro ámbito donde es posible notar cómo avanza el proceso privatizador del DIPr, es el referido a la actividad de los organismos internacionales de la codificación internacional del DIPr y del Derecho del comercio internacional. La última etapa de la Conferencia de La Haya de DIPr está repleta de ejemplos de “interacción” entre sectores privados, autoridades de la Conferencia y representantes de los Estados miembros de la misma, en lo que se refiere a la discusión de determinados temas. Los ejemplos más claros se dan en la discusión del Proyecto de convención mundial de exequátur y en la relativa al Proyecto de convención sobre intermediación financiera.

En la reciente CIDIP VI (celebrada en Washington, DC, entre el 4 y el 8 de febrero de 2002), quedó claramente de manifiesto que incluso la codificación del DIPr en la instancia regional americana que se desarrolla en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sufre las consecuencias de este proceso. En esa ocasión, como era de prever, se aprobaron dos textos vinculados más con el Derecho del comercio internacional que con el DIPr clásico: la Ley modelo interamericana sobre garantías mobiliarias y dos modelos (uno negociable y otro no) de Carta de porte directa uniforme interamericana para el transporte internacional de mercaderías por carretera. Ambos textos tuvieron su origen, su impulso y, en gran medida, las razones de su concreción, en la actividad llevada a cabo por un organismo privado, el National Law Center for the International Free Trade, que ha contado para esa tarea con significativa financiación privada. Claro que hay que introducir un importante matiz: ese centro “privado” cuya sede está en Tucson (Arizona), a veces opera en el marco de la CIDIP indistintamente como delegación norteamericana y tiene —ostensiblemente— un diálogo muy fluido con el Departamento de Estado del Gobierno norteamericano.

Epílogo

Hasta aquí estos breves apuntes. Hemos querido, nada más, plantear unas líneas generales de reflexión en torno a los fenómenos que hemos identificado como principales. Desde luego, puede pensarse en otros varios fenómenos, del mismo modo que los que aquí hemos esbozado pueden ser observados desde muchas otras perspectivas. Lo que nos interesaba era mostrar el estado actual de unas cuestiones fundamentales, que nos tienen que servir como parámetros para analizar la adecuación de los sistemas de DIPr vigentes en nuestros países a la realidad actual. Una mirada, siquiera a vuelo de pájaro, de dichos sistemas a la luz de los parámetros mencionados, exige claramente un replanteo tan global como profundo respecto de las concepciones básicas, de la política de producción jurídica estatal e internacional, y del funcionamiento de nuestros sistemas.

Alguna bibliografía complementaria

AGUILAR BENÍTEZ DE LUGO, M., «La cooperación internacional como objetivo del derecho internacional privado», *Cursos de Derecho internacional de Vitoria -Gasteiz*, 1991, pp. 171-225; BOUCALT, C.E. DE A. / DE ARAUJO, N. (ed.), *Os direitos humanos e o direito internacional*, Río de Janeiro, 1999; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Matrimonio y elección de ley. Estudio de Derecho internacional privado*, Granada, 2000; CIURO CALDANI, M.A., *El derecho internacional privado ante los procesos de integración*, Rosario, 1998; DELBRÜCK, J., "Global Migration-Inmigration-Multiethnecity: Challenges to the Concept of the Nation-State", *Indiana Journ. of Global Legal Studies*, 2, 1994 (www.law.indiana.edu/glls/); DETRICK, S. / VLAARDINGERBROEK, P. (ed.), *Globalization of Child Law. The Role of the Hague Conventions*, La Haya, etc., 1999; FERNÁNDEZ ARROYO, D.P., *Derecho internacional privado (una mirada actual sobre sus elementos esenciales)*, Córdoba, Advocatus, 1998; FERNÁNDEZ ARROYO, D.P., "International Contract Rules in MERCOSUR: End of an Era or Trojan Horse?", *International Conflicts of Laws for the Third Millennium. Essays in Honor of Friedrich K. Juenger*, Ardsley (N.Y.), 2000, pp. 157-173; FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., "Orientaciones del derecho internacional privado en el umbral del siglo XXI", *Rev. Mex. DIPr*, núm. esp., 2000, pp. 7-32; GARCÍA SEGURA, C., "La globalización en la sociedad internacional contemporánea: dimensiones y problemas desde la perspectiva de las relaciones internacionales", *Cursos de derecho internacional de Vitoria-Gasteiz*, 1998, pp. 315-350; JAYME, E., "Identité culturelle et intégration. Le droit international privé postmoderne", *Recueil des Cours*, 251, 1995, pp. 9-267; JAYME, E., "Zum Jahrtausendwechsel: Das Kollisionsrecht zwischen Postmoderne und Futurismus", *IPRax*, 2000, pp. 165-173; JAYME, E., "Le droit international privé du nouveau millénaire: la protection de la personne humaine face à la globalisation", *Recueil des Cours*, 282, 2000, pp. 9-40; VAN LOON, H., "Unification and Co-operation in the Field of International Family Law: A Perspective

from The Hague", *E Pluribus Unum. Liber Amicorum Georges A.L. Droz*, La Haya, etc., 1996, pp. 173-190; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, O., "El neoliberalismo en su laberinto", *Revista bimestral cubana*, 85, 1999, pp. 3-20, y 86, 1999, pp. 117-129; McCLEAN, D., "De Conflictu Legum. Perspectives on Private International Law at the Turn of the Century", *Recueil des Cours*, 282, 2000, pp. 41-228; VON OVERBECK, A.E., "L'irresistible extension de l'autonomie en droit international privé", *Hommage François Rigaux*, Bruselas, 1993, pp. 619-636; SOUTO, C., *Introdução crítica ao direito internacional privado*, Porto Alegre, 2000.